

Evaluación detallada de necesidades

Istmina y Quibdó - Chocó

CONTEXTO

El municipio de Quibdó, situado en el departamento de Chocó, cuenta con una población de 142,184 habitantes. De este total, 65,488 (46%) son hombres y 76,696 (53%) son mujeres, según datos del DANE. La población en la cabecera municipal asciende a 121,670 personas, mientras que en los centros poblados y zonas rurales se contabilizan 20,514 habitantes. En términos demográficos, la población de 0 a 17 años se distribuye en 48,762 personas, divididas entre 24,456 niñas/adolescentes y 24,306 niños/adolescentes. Además, se estima que alrededor de 2,059 personas migrantes venezolanas residen en la región.

Por otro lado, Istmina, también ubicado en el departamento de Chocó, tiene una población total de 33,188 personas, con 16,062 hombres y 17,126 mujeres. De este total, 23,937 personas residen en la cabecera municipal, mientras que 9,251 se encuentran en centros poblados y zonas rurales. La población de 0 a 17 años en Istmina alcanza las 11,368 personas, con 5,633 niñas/adolescentes y 5,735 niños/adolescentes. Además, se estima que alrededor de 308 personas migrantes venezolanas residen en la región.

Conflicto Armado

Víctimas del Conflicto Armado

La situación humanitaria en el departamento del Chocó ha experimentado un marcado deterioro desde el segundo semestre de 2021, persistiendo en los últimos años. Este deterioro se atribuye principalmente a la expansión y consolidación de dos Grupos Armados No Estatales (GANE): El Clan del Golfo y el ELN. Ambos compiten por el control de rutas relacionadas con el tráfico ilegal, la producción y procesamiento de estupefacientes, así como la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas. La ruptura del pacto de no agresión entre las facciones de estos GANE en la Subregión del San Juan ha exacerbado las emergencias humanitarias.

Estas dinámicas han desencadenado acciones armadas y numerosos ataques dirigidos contra la población civil, especialmente en la Subregión del San Juan y Baudó. A pesar de ello, persisten prácticas de control social por parte de los GANE, ejerciendo un impacto negativo en la situación humanitaria y los derechos humanos de la población civil. En subregiones como Darién y Atrato, se observa la imposición de reglamentos de conducta por parte de los GANE, agravando la complejidad de la crisis en la región.

Según la Red Nacional de Información (RNI), hasta el 31 de octubre de 2023, en el municipio de Quibdó se han registrado, con corte a octubre de 2023 por lugar de ocurrencia, 61.774 víctimas del conflicto armado. En cuanto al sexo asignado al nacer, se reportan 32.515 mujeres, 29.173 hombres, 14.861 niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años, de los cuales 7.272 son niñas/adolescentes.

En términos de ubicación geográfica, hasta octubre de 2023 se han registrado un total de 66,769 víctimas del conflicto armado. Entre ellas, 36.859 (55%) son mujeres, 29.825 (45%) son hombres, 17.511 son niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, de los cuales 8.842 son niñas (50%).

Por su parte, en el municipio de Istmina se registran, por lugar de ocurrencia de los hechos hasta octubre de 2023, 23.337 víctimas del conflicto armado. De estas, 12.094 son mujeres, 11.230 son hombres, 5.743 son niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años, de los cuales 2.755 son niñas.

Esta exposición puede generar traumas psicológicos, miedo constante y estrés postraumático en niñas, niños y adolescentes, afectando su bienestar emocional y desarrollo cognitivo. La violencia y la inseguridad causadas por los grupos armados pueden forzar a las familias a desplazarse, dejando a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El desplazamiento puede interrumpir su educación, exponiéndolos a mayores riesgos de explotación y abuso, y privándolos de sus redes de apoyo. Además, las restricciones impuestas por los grupos armados y la violencia generalizada en la región pueden resultar en la violación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo el derecho a la vida, la integridad personal, la educación y la protección contra la explotación y el abuso.

Desplazamiento forzado y Confinamiento

Dentro de los principales riesgos y amenazas que enfrentan las niñas, niños, adolescentes y jóvenes se encuentra el desplazamiento forzado. En Istmina, durante 2023, se registraron 353 personas víctimas de desplazamiento forzado, de las cuales 180 fueron mujeres, 172 hombres y 149 niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años, siendo 77 de ellos niñas.

En el mismo período, en el municipio de Quibdó, se contabilizan 2.014 personas víctimas de desplazamiento forzado. Según el sexo asignado al nacer, 1.132 fueron mujeres, 876 hombres y 874 niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años, con 422 fueron niñas. Esto se atribuye a los constantes enfrentamientos por territorio entre bandas criminales como el Clan del Golfo y el ELN, que tienen presencia en varios territorios, convirtiéndose en una de las afectaciones más recurrentes. Las causas principales incluyeron incursiones, amenazas, enfrentamientos, hostigamientos, riesgo de reclutamiento y homicidios selectivos perpetrados por los Grupos Armados No Estatales (GANE). También, las personas de la comunidad LGTBIQ+ fueron víctimas de estos desplazamientos.

Las implicaciones del desplazamiento forzado para niñas, niños y adolescentes son significativas y pueden tener efectos a largo plazo en su bienestar y desarrollo. Entre las principales consecuencias se encuentran el trauma y estrés emocional. Al ser obligados a abandonar sus hogares y comunidades, perder sus pertenencias y enfrentarse a la incertidumbre del futuro, las niñas, niños y adolescentes pueden experimentar ansiedad, miedo y depresión. Además, el desplazamiento a menudo interrumpe su educación debido a la destrucción de escuelas, falta de acceso a la educación en los lugares de destino o la necesidad de contribuir al sustento familiar. Esta interrupción puede tener consecuencias a largo plazo en su capacidad para alcanzar su máximo potencial educativo y limitar sus oportunidades futuras. Asimismo, las niñas, niños y adolescentes desplazados están en mayor riesgo de sufrir explotación o abuso, ya sea por reclutamiento forzado por grupos armados, explotación infantil o violencia sexual. La falta de protección y el entorno de inseguridad aumentan su vulnerabilidad a estos riesgos.

Por otro lado, el Equipo Local de Coordinación (ELC) del Chocó reportó 7 desplazamientos forzados masivos que afectaron a 2.439 personas en el mismo período, donde el 83% eran población negra/afrocolombiana y el 17% eran población indígena. Este dato representa un aumento del 50% en la afectación a la población indígena con respecto al semestre anterior del 2022. Además, consolida al Chocó como el tercer departamento en Colombia con el mayor número de víctimas de desplazamiento, después de Nariño y Valle del Cauca.

Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes

Durante el primer semestre del año 2023, la Defensoría del Pueblo emitió tres Alertas Tempranas (AT), advirtiendo sobre el riesgo inminente de reclutamiento e instrumentalización para actividades ilícitas de niñas, niños y adolescentes. Estas alertas se dirigieron a los municipios de Ungía, Acandí, Jurado, Río Iro y Bagadó. Según la Red Nacional de Información, en lo que va

del 2023, en el municipio de Quibdó se registró la vinculación de un niño de entre 12 y 17 años a actividades relacionadas con grupos armados.

El reclutamiento forzado en Quibdó e Istmina se manifiesta como una problemática significativa. A pesar de su magnitud, esta situación carece de una documentación adecuada, ya que las personas afectadas, atemorizadas por las consecuencias, y en ocasiones con falta de confianza en la institucionalidad, optan por no denunciar estos hechos.

Violencias Basadas en Género

En Quibdó, según datos al 3 de noviembre de 2023 de la Fiscalía General de la Nación, se han registrado un total de 5 casos de feminicidios. Al analizar la edad de las víctimas, se reporta que uno de los feminicidios fue cometido contra una mujer de 18 a 26 años, mientras que los otros 4 casos fueron perpetrados contra mujeres de 27 a 59 años.

En Quibdó se han presentado un total de 67 denuncias por delitos sexuales, siendo las mujeres las más afectadas con 59 casos reportados, mientras que los hombres suman 7 denuncias. Además, se registra una denuncia sin dato de sexo asignado al nacer específico. Estas cifras demuestran la prevalencia de los delitos sexuales en Quibdó, así como la disparidad en la cantidad de víctimas entre mujeres y hombres.

Del total de denuncias en el rango de edades de 0 a 17 años, se observa que 36 niñas entre 0 y 17 años han sido víctimas de estos delitos, mientras que se identifican 4 niños víctimas. Esto resalta la vulnerabilidad de las niñas y los niños ante la violencia sexual y la necesidad de medidas específicas para protegerles en la comunidad. Por su parte, en Quibdó, alrededor de 31 niñas entre los 10 y 14 años, tuvieron embarazos infantiles forzados, producto del delito grave de abuso sexual. Este hecho es alarmante y revela una situación de vulnerabilidad y violencia sexual que afecta a las niñas en esa comunidad, resaltando la urgencia de abordar este problema y proteger los derechos y la seguridad de las niñas en Quibdó.

En relación con Istmina, se reportó un caso de feminicidio en el que la víctima tenía entre 27 y 59 años de edad. En este municipio, se presentaron un total de 18 denuncias por delitos sexuales, de las cuales 16 involucraron a mujeres y 2 a hombres. En cuanto a las edades de las víctimas, se registraron 16 casos que afectaron a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, siendo 14 de estas denuncias relacionadas específicamente con niñas y 2 con niños. En lo que respecta al embarazo infantil forzado, se observó que aproximadamente 7 niñas entre los 10 y 14 años, fueron víctimas del delito de abuso sexual, y producto de ello tuvieron un parto forzado. Es importante señalar que el término “aproximadamente” se debe a que pudieron haber sido partos gemelares, pero no se cuenta con esta información detallada.

Durante el primer semestre del 2023, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) registró 23 hechos contra la libertad e integridad sexual en el marco del conflicto armado en el Chocó. El 95% de las víctimas fueron mujeres; de ellas, el 8% eran menores de edad, el 82% eran mujeres negras/afrocolombianas y el 17% eran mujeres indígenas. Este período se caracterizó por un aumento desproporcionado en los riesgos de violencia de género hacia las mujeres, especialmente las niñas y adolescentes indígenas, así como las niñas y adolescentes negras/afrocolombianas, siendo las más afectadas. Los Grupos Armados No Estatales (GANEs) perpetraron explotación, violencia sexual, reclutamiento o confinamiento de niñas, adolescentes y mujeres.

El subgrupo de género del Equipo Local de Coordinación (ELC) identificó cuatro feminicidios no registrados oficialmente debido a la falta de recursos financieros y humanos. La capacidad institucional limitada en el Chocó afecta gravemente la respuesta ante la Violencia Basada en Género (VBG). Por ejemplo, el subregistro de feminicidios es común debido a la falta de recursos financieros y humanos. Esta limitación en los servicios especializados aumenta los riesgos para las mujeres. Urge una respuesta inmediata y asignación de recursos para proteger a estas comunidades vulnerables. Además, la falta de

oportunidades económicas para las mujeres, especialmente las jóvenes, conduce a prácticas negativas de afrontamiento, como el sexo transaccional y las uniones tempranas.

Por otro lado, las mujeres migrantes y refugiadas son expuestas a Violencia Basada en Género (VBG), entre las más frecuentes se encuentran la violencia sexual, explotación sexual y la trata de personas durante su travesía por el tapón del Darién, perpetradas por la presencia y control de los GANE. Sumado a esto, debido a su estatus migratorio tienen un acceso limitado a mecanismos de protección institucional y a rutas de atención a la VBG, lo que las disuade de buscar ayuda por temor a ser deportadas.

Afectaciones por Riesgos Ambientales

Desastres de origen natural

El departamento del Chocó, ubicado en una zona expuesta a numerosos riesgos asociados a fenómenos naturales como terremotos, maremotos, inundaciones y deslizamientos, enfrenta desafíos significativos. En Quibdó, el crecimiento urbano no planificado ha generado una configuración improvisada y carente de orden, especialmente en las riberas de los ríos, donde población migrante y desplazada se establece, aumentando los niveles de amenazas de desastres naturales.

Las características geográficas de una selva tropical lluviosa, con precipitaciones constantes a lo largo del año, provocan ciclos de inundaciones debido a la presencia de numerosos afluentes hídricos. Aunque se observó una disminución del 39% en los eventos de inundación, posiblemente asociada a la variabilidad climática del Fenómeno del Niño, que se caracteriza por temperaturas más altas y menos lluvias en la región (OCHA, 2023), se presentaron eventos relacionados con vientos fuertes y lluvias torrenciales durante este periodo.

Estos eventos impactaron en vías principales, secundarias, viviendas, infraestructura educativa y causaron pérdidas en cultivos de *pancoger*, que incluyen maíz, frijol, yuca, plátano, entre otros. La mayoría de los municipios afectados experimentaron doble afectación debido a confinamientos y/o desplazamientos, exacerbando las necesidades humanitarias, como la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud. El deterioro de los terrenos cultivables por al menos seis meses lleva a la aparición de enfermedades relacionadas con la falta de macronutrientes, afectando especialmente a niñas y niños menores de cinco años y mujeres gestantes y lactantes. Emerge la necesidad de fortalecer los mecanismos de información y registro, considerando un enfoque diferencial (etario, de género y étnico) para articular decisiones asertivas en la gestión de riesgo de desastres.

Según los datos recopilados del Reporte de damnificaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el municipio de Quibdó se reportó un vendaval el 04/08/2023, dejando 1.873 personas afectadas, 1.244 familias afectadas, 694 viviendas averiadas, 268 no habitables y 81 destruidas. Frente al territorio de Istmina, se registró una inundación el 17/09/2023, afectando a 790 personas, 305 familias, 294 viviendas averiadas, 4 no habitables y 1 destruida. Estos eventos generan pánico en la población debido a los daños ocasionados en sus entornos, viviendas y escuelas.

Contaminación ambiental

El Chocó Biogeográfico de Colombia, reconocido globalmente por albergar algunos de los bosques más biodiversos del planeta, enfrenta serios desafíos ambientales y sociales. La explotación minera, especialmente la extracción de oro que se extiende por 17 municipios, incluyendo Quibdó e Istmina, se destaca como una amenaza significativa. Esta actividad no solo atrae a grupos armados ilegales, generando caos en la región donde el gobierno lucha por mantener el control, sino que también impacta negativamente en la salud de la población debido a la mala calidad ambiental.

La explotación minera contribuye a la contaminación del aire y el agua, afectando directamente la calidad de vida de la población chocoana. La presencia de materia orgánica proveniente de actividades antrópicas, como el vertido de aguas contaminadas utilizadas en minería y agricultura para la comercialización de productos, agrava la calidad ambiental. Esto se refleja en la detección de contaminación por mercurio en peces consumidos por la población.

La contaminación ambiental, especialmente por mercurio, afecta la salud de la población, incluyendo a mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes. El consumo de peces contaminados con mercurio puede causar problemas neurológicos, desarrollo cognitivo deficiente y otros problemas de salud graves. La violencia y los impactos ambientales pueden forzar a familias, incluyendo a mujeres y niñas, niños y adolescentes, a abandonar sus hogares en busca de seguridad y mejores condiciones de vida. El desplazamiento forzado tiene graves consecuencias en la salud física y mental, la educación y el bienestar general de las personas afectadas.

Las mujeres y las niñas enfrentan riesgos adicionales de Violencia Basada en Género (VBG) en el contexto de la explotación minera y la presencia de grupos armados ilegales. La falta de oportunidades económicas puede llevar a mujeres y niñas a situaciones de vulnerabilidad donde se ven obligadas a realizar actividades de alto riesgo para sobrevivir.

PRINCIPALES HALLAZGOS

La evaluación minuciosa de necesidades realizada en los municipios de Quibdó e Istmina proporcionó una visión general de las principales carencias sectoriales, los grupos vulnerables afectados, los riesgos emergentes y las limitaciones en la atención. Este análisis se basó en la revisión exhaustiva de información primaria y secundaria, revelando los siguientes hallazgos:

Incremento del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el marco del conflicto armado

En el departamento del Chocó, el reclutamiento forzado, las violencias basadas en género, el desplazamiento y la intimidación constituyen los factores más impactantes en la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Estas situaciones les exponen al reclutamiento forzado, accidentes con minas antipersonales, explotación sexual por parte de actores armados, deserción escolar y desafíos de salud mental, entre otras dificultades. Como consecuencia, enfrentan experiencias de vida difíciles, interrumpiendo abruptamente su niñez y juventud.

Reclutamiento forzado

La región enfrenta una situación grave debido al conflicto armado, donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes se exponen al reclutamiento tanto en barrios como en escuelas. Aunque se reconoce la gravedad del problema, la falta de documentación y denuncias, motivada por el temor de las personas afectadas, dificulta la comprensión completa y la intervención eficaz de las autoridades. La presencia de grupos armados en la zona y las amenazas a docentes y estudiantes contribuyen al subregistro de casos de violencia basada en género y reclutamiento forzado en las escuelas. A pesar de la implementación de mesas de participación para abordar estas situaciones, la complejidad del contexto impide resultados significativos.

La existencia de Minas Antipersonal (MAP) en los alrededores de las Instituciones Educativas pone en riesgo la protección de niñas, niños y adolescentes. En 2023 se registró la plantación de minas antipersonal por grupos armados en Quibdó e Istmina, generando riesgos en áreas comunitarias y educativas. Estos artefactos, utilizados para control territorial, han llevado a la suspensión de actividades escolares y representan una amenaza constante, con predominio de víctimas masculinas.

Riesgos y amenazas de las niñas, niños y adolescentes en el territorio

En los entornos de Quibdó e Istmina, la niñez y juventud enfrentan una compleja red de riesgos que amenazan su bienestar y desarrollo integral. La persistente presencia de grupos armados en la región aumenta la exposición al reclutamiento forzado, exponiendo a las niñas, niños y adolescentes a situaciones de violencia y amenazas constantes. Además, las escuelas se convierten en espacios donde estas amenazas se materializan, afectando el acceso a la educación segura.

Los desplazamientos forzados son una realidad preocupante, ya que las familias se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia, generando una crisis humanitaria. Este contexto contribuye a la falta de acceso a servicios de salud mental, exacerbando los problemas emocionales y psicosociales en niñas, niños y adolescentes. Es imperativo abordar estas complejas problemáticas para garantizar un entorno seguro y saludable para la infancia y juventud en la región del Chocó.

La presencia de minas antipersonal en las áreas circundantes a las instituciones educativas no solo interrumpe las actividades escolares, sino que también representa un peligro constante para la movilidad de la población joven. A esto se suma la violencia basada en género, con un impacto significativo en las niñas, niños y mujeres jóvenes, quienes enfrentan amenazas y abusos. La deserción escolar es una consecuencia directa de estos riesgos, ya que muchas familias temen enviar a sus hijas e hijos a las escuelas debido a la inseguridad.

Desplazamiento forzado

En Quibdó e Istmina, el desplazamiento forzado emerge como una problemática central, exacerbada por la presencia constante de grupos armados al margen de la ley y la violencia en la región. Familias enteras se ven obligadas a abandonar sus hogares, enfrentando una crisis humanitaria. Este fenómeno impacta de manera significativa a la niñez, adolescencia y juventud, quienes, al huir de la violencia, se enfrentan a la interrupción de su educación, la exposición a riesgos de reclutamiento forzado y la pérdida de sus entornos familiares y comunitarios.

Violencia intrafamiliar y explotación sexual

El incremento en el número de niñas y niños que son víctimas de maltrato infantil es una preocupación creciente, especialmente en el entorno familiar. Personas agresoras, a menudo dentro de la misma familia, ejercen maltrato psicológico, abuso sexual y negligencia, estos casos son a menudo ocultos dentro de hogares extensos.

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes no solo son víctimas de maltrato por parte de sus madres, padres y personas cuidadoras, sino que también enfrentan situaciones de abuso perpetradas por familiares cercanos. Este tipo de entorno familiar es propenso a casos de negligencia y abuso sexual, agravados por la presencia de trabajo infantil forzado, explotación sexual y comercial infantil, abandono escolar y carencias básicas, derivadas de la extrema pobreza que afecta a los municipios de Quibdó e Istmina. El maltrato psicosocial genera eventos traumáticos significativos, contribuyendo al aumento de la morbilidad por afectaciones a la salud mental que han desencadenado problemas de depresión, ansiedad, estrés agudo y estrés postraumático.

Salud mental y bienestar psicosocial

La salud mental es un tema cuya relevancia no es tan reconocida en el territorio, y el desconocimiento frente al tema no ha permitido acciones articuladas donde el Estado, la familia, educadores e instituciones que puedan promover el acceso integral de niñas y niños. El entorno escolar no puede desconocer la realidad reflejada en el contexto social y cultural; por el contrario, se debe concientizar a las y los educadores sobre la importancia de estos temas. En ocasiones, niñas, niños, adolescentes y jóvenes callan sobre estos temas, por la poca respuesta y el miedo a ser juzgadas o juzgados. La presencia de actores armados al margen de la ley en los territorios también deriva en afectaciones de salud mental; su presencia en las escuelas y las constantes amenazas ocasionan temor y angustia en niñas y niños. Además, el desplazamiento forzado rompe vínculos sociales y genera separación familiar, acentuando mayormente los problemas psicosociales.

Trabajo infantil

En la región, el trabajo infantil se origina a partir de diversas condiciones económicas, culturales, políticas y sociales que afectan tanto a las familias como a la integridad personal de niñas, niños y adolescentes (NNA). Las necesidades económicas no satisfechas y la falta de evolución en el sistema educativo, tanto en calidad como en cobertura, les impulsan a trabajar desde temprana edad para contribuir a los ingresos familiares.

Alimentación escolar

En Quibdó, el Programa de Alimentación Escolar beneficia a aproximadamente 32,000 estudiantes y cuenta con un equipo que incluye una persona profesional en nutrición, y el rector o rectora de la institución educativa o docente para supervisar y asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos. Ante un aumento en la cantidad de estudiantes, se realiza una adición al contrato original para asegurar que las y los estudiantes registrados en el sistema integrado de matrícula (SIMAT) reciban el beneficio.

A pesar de estos esfuerzos, algunos colegios han expresado preocupaciones por la insuficiencia en los suministros, afectando la ejecución del programa según lo planificado.

Desastres naturales y afectaciones por el cambio climático

En Quibdó e Istmina, la constante exposición a desastres naturales, como inundaciones, vendavales y movimientos en masa, ha generado impactos significativos en la región. La selva tropical lluviosa y la presencia de numerosos afluentes hídricos contribuyen a mayores riesgos de inundaciones. La afectación se ve agravada por desplazamientos y confinamientos, exacerbando las necesidades humanitarias, especialmente en seguridad alimentaria, nutrición y salud, afectando de forma desproporcionada a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Debido a su menor fuerza física, las niñas, niños y adolescentes son más susceptibles a sufrir lesiones o daños durante desastres naturales como inundaciones o vendavales. También pueden tener dificultades para evacuar o buscar refugio por cuenta propia. En situaciones de emergencia, las niñas, niños y adolescentes pueden tener exposición a un mayor riesgo de explotación y abuso ya sea por parte de grupos armados al margen de la ley o incluso por personas de la comunidad.

Contexto educativo y calidad del servicio

Entre los desafíos más significativos en el ámbito educativo, se encuentran la alineación de programas de mejoramiento institucional, expansión y mejora de la infraestructura educativa, gestión de la alimentación escolar y diversificación de la oferta educativa. Como se ha identificado, las y los adolescentes enfrentan una alta tasa de deserción escolar, motivada por la escasez de proyectos de vida, la falta de oportunidades y la necesidad de contribuir al sustento familiar. Es crucial resaltar que las niñas son especialmente vulneradas, ya que se observa que deben abandonar sus estudios para atender responsabilidades asociadas al cuidado familiar, así como la exposición a la explotación sexual y comercial como consecuencia del conflicto armado, que las expone aún más al riesgo de abandonar la escuela. Adicionalmente, se ha identificado que el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas a temprana edad tiene un impacto negativo significativo en el desempeño académico, lo cual lleva a las y los adolescentes a no retornar a clases o a suspender el año, aumentando el riesgo de deserción.

Falta de acceso a servicios básicos

En Quibdó, la falta de servicios públicos es una problemática generalizada, con escaso acceso a agua potable y servicios básicos en la mayoría de los hogares. A pesar de que algunas escuelas cuentan con acceso al agua, la infraestructura deteriorada y la limitada cantidad de letrinas generan problemas asociados a salubridad. Los datos estimados muestran que la cobertura de acueducto y alcantarillado es baja, tanto en el área urbana como rural.

En Istmina, la falta de datos actualizados dificulta la evaluación precisa de la cobertura de agua potable, pero se estima que la situación es aún menos favorable que en Quibdó. En Quibdó, la principal fuente hídrica es el agua de lluvia, siendo esta práctica más preocupante para la población indígena situada a orillas de los ríos, donde las actividades diarias y las necesidades fisiológicas se realizan cerca de estas fuentes de agua, generando riesgos de contaminación y de enfermedades de origen hídrico.

La falta de acceso a agua potable y falencias en su tratamiento para consumo, afecta de manera desproporcionada a niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres ya que, entre otras razones, limita las condiciones para una adecuada higiene personal y gestión menstrual para niñas y mujeres. Esto puede aumentar el riesgo de infecciones y enfermedades relacionadas con el cuidado menstrual. Adicionalmente, las niñas, niños y adolescentes pueden perder días de escuela debido a enfermedades causadas por el consumo de agua contaminada o la falta de acceso a instalaciones sanitarias adecuadas. La falta de acceso a agua potable puede exponer a niñas, adolescentes y mujeres a situaciones de riesgo y violencia cuando tienen que buscar agua lejos de sus hogares, especialmente durante la noche.

RESULTADOS

La evaluación detallada de necesidades llevada a cabo en Chocó ha revelado datos cruciales que permiten observar diversas carencias en sectores específicos, así como identificar grupos de personas vulnerables, riesgos y limitaciones en la atención de la primera infancia, así como dificultades para acceder a una educación duradera y de calidad. Este análisis se sustentó en la revisión de información secundaria y en entrevistas con líderes regionales, resaltando la importancia de la articulación y análisis de las singularidades del contexto social en la gestión de propuestas.

Incremento del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado

En el territorio, se observa un alarmante incremento en el reclutamiento forzado, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados. La niñez y la adolescencia es utilizada en actividades como reclutamiento forzado, tráfico de armas, cultivos ilícitos y producción, comercialización y tráfico de drogas. Se registra también un aumento en la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes, principalmente de las mujeres, generando gran preocupación en la población del departamento.

La presencia de bandas delictivas en Quibdó ha creado un ambiente conflictivo que impacta negativamente a las instituciones educativas. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes son reclutados forzosamente o se ven obligados a unirse a estos grupos debido al miedo, relaciones de poder, intimidación, amenazas o la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Este fenómeno afecta a estudiantes de primaria y secundaria, independientemente de su edad y género, fomentando la intimidación entre pares e incluso hacia el personal docente. La falta de denuncias en las escuelas contribuye a la invisibilidad de esta problemática, evidenciando la necesidad urgente de abordarla de manera integral.

La información primaria obtenida a través de grupos focales destaca la conexión entre la violencia presente en el entorno de niñas, niños y adolescentes, abarcando desde el ámbito familiar hasta el comunitario. Este entramado social contribuye a la propagación de diversas formas de violencia, como el abuso infantil, el acoso escolar, la violencia basada en género (VBG) y la violencia comunitaria, generando un ciclo difícil de romper. Este análisis pone de manifiesto la urgencia de abordar de manera integral esta compleja problemática, considerando sus múltiples dimensiones.

Reclutamiento forzado

De acuerdo con un informe de la Procuraduría del año 2023, la grave situación de reclutamiento forzado de personas menores de edad por parte de grupos armados ilegales como el ELN y el Clan del Golfo está provocando una alta deserción escolar y un aumento en los suicidios de jóvenes en Chocó. Aunque no hay un registro exacto de niñas, niños y adolescentes reclutados en el departamento, las cifras entregadas por la Policía Regional indican la recuperación de 58 personas menores de edad de las filas de estos grupos armados en 2023, subrayando la considerable subnotificación de este fenómeno.

El asesor delegado por la Procuradora para liderar la comisión especial en Chocó destaca que "una de las graves consecuencias que está dejando el incremento del reclutamiento forzado es el suicidio de jóvenes por temor a ser cooptados para la guerra". La información primaria recopilada sugiere que numerosos niños varones optan por abandonar sus estudios debido al temor de ser reclutados, ya que la presencia del actor armado se hace sentir en los entornos escolares.

Los niños varones son más propensos a ser reclutados, ya que son percibidos como potenciales combatientes con mayor capacidad física para el combate y otras tareas relacionadas con la guerra. Por otro lado, las niñas pueden ser consideradas más vulnerables, lo que las hace menos

aptas para resistir el entrenamiento militar y las difíciles condiciones asociadas con la vida en un grupo armado. La prohibición del diálogo con los niños a sus madres, padres o cuidadores genera una carga emocional considerable, exponiendo a los niños a riesgos asociados con el actor armado.

La deserción escolar en la región se agrava debido al desplazamiento de familias y al confinamiento en los municipios. El temor al reclutamiento durante los desplazamientos hacia las escuelas y colegios contribuye significativamente a esta problemática. En este contexto, es crucial abordar las causas profundas de la deserción y el reclutamiento forzado, considerando factores de género y edad, para implementar estrategias efectivas y garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes en Chocó.

“Hoy en día si escuchan algo, la población no se acerca. La misma población entró en miedo, en crisis y eso afecta a todos y más las institucionalidades, si no es que algunos funcionarios están con miedo, está con crisis porque los funcionarios tienen que cuidarse mucho al salir a las comunidades a hablar, a los espacios y de pronto cuando ellos hablan y dan una recomendación favorable y el grupo o el actor no le gusta, ahí está la amenaza también para el funcionario. Son cosas que a uno le duele, y un tema que no se me puede olvidar aquí en Quibdó es la desaparición forzada aquí se desaparecen los niños, niñas adolescentes y nadie da cuenta.” (Líder social, 2024)

Un líder social que participó en un grupo focal compartió testimonios sobre la situación en las zonas rurales de Quibdó. Las madres y mujeres cuidadoras en estas comunidades experimentan profundos impactos psicológicos debido a la perturbadora presencia de actores armados en sus territorios. Además de la irrupción en las comunidades, estos actores se apropian de viviendas, incluso llegando al extremo de ejercer violencia sexual contra las hijas de las familias. El miedo y el silencio imperante impiden a estas mujeres expresar su angustia o

denunciar los abusos, y en muchos casos, optan por regresar a fincas anteriores como una forma de escapar de la violencia y la intrusión.

Estigmatización de Víctimas de Violencia Sexual

Cuando las familias descubren que sus hijas han sido víctimas de violencia sexual, optan por trasladarlas a otros territorios para evitar el estigma asociado. Los estereotipos y prejuicios en muchas sociedades contribuyen a la estigmatización de las víctimas, generando falsas creencias de que estas "pidieron" o "provocaron" la agresión. Este estigma no solo afecta a las víctimas, sino que también interrumpe sus vínculos familiares y proyectos de vida, obligándolas a abandonar sus territorios hacia entornos diferentes.

Impacto en la Educación de Adolescentes

Las personas adolescentes de 14 a 17 años son especialmente propensas a abandonar sus estudios debido al constante desplazamiento al que se ven expuestas. Este desplazamiento provoca retrasos significativos en los grados que cursan, haciéndolas sentir fuera de lugar en sus aulas y llevándolas a optar por actividades laborales en lugar de continuar con su educación.

Desafíos Institucionales

A pesar de los esfuerzos institucionales en Quibdó para abordar la violencia, el reclutamiento forzado y otras vulneraciones, se enfrentan a desafíos significativos. La presencia de grupos armados en los barrios impide la entrada de ayuda, y las "fronteras invisibles" en el territorio obstaculizan la efectividad de las medidas institucionales al no romper las dinámicas arraigadas en la comunidad.

Riesgo por Minas Antipersonal

La instalación de Minas Antipersonal (MAP) en los alrededores de Instituciones Educativas representa una grave amenaza para la protección de niñas, niños y adolescentes. Los Grupos Armados No Estatales (GANE) utilizan estas minas como medio de coerción, limitando la

movilidad de la población y generando un ambiente de temor y desconfianza. Los datos de la Presidencia de la República revelan un riesgo desigual entre mujeres y hombres expuestos a las MAP, evidenciando la necesidad de abordar estas disparidades de género.

La sospecha de contaminación de MAP en el 93% del departamento de Chocó y la limitada actividad de desminado humanitario en solo dos municipios señalan una prolongación de las afectaciones humanitarias y de desarrollo. Esto impide el acceso libre y oportuno a medios de vida por parte de las comunidades, representando un elevado riesgo para la vida e integridad de las personas habitantes. La urgente necesidad de desminado y atención humanitaria integral resalta la complejidad y gravedad de la situación en Chocó, exigiendo respuestas coordinadas y efectivas a nivel local y nacional.

Riesgos y amenazas de las niñas, niños y adolescentes en el territorio.

Desplazamiento Forzado

En el contexto actual de Istmina, se evidencia como un destino receptor de desplazamientos de numerosas comunidades afectadas por el conflicto armado en lugares como Medio San Juan, Nóvita y Sipí, entre otros. Este fenómeno ha llevado a que familias envíen a sus hijas e hijos a estudiar en Istmina, procedentes de comunidades rurales cercanas o incluso más distantes. Sin embargo, el desplazamiento forzado genera una división en los grupos familiares y una separación de niñas y niños con respecto a sus tradiciones culturales y territoriales.

En Istmina, donde el desplazamiento se ha convertido en un fenómeno recurrente, muchas niñas y niños han experimentado esta situación en repetidas ocasiones, enfrentándolos a complejidades y desafíos adaptativos. Esta realidad destaca la importancia de abordar no solo los retos educativos, sino también las implicaciones emocionales y sociales que la niñez enfrenta al transitar hacia nuevos contextos.

La diferencia entre el desplazamiento en Istmina y Quibdó radica en la escala y naturaleza de los desplazamientos. Mientras en Istmina pueden desplazarse comunidades enteras, en Quibdó el desplazamiento tiende a manifestarse a nivel individual, especialmente cuando las niñas y niños entran en la adolescencia y se convierten en potenciales reclutas para bandas criminales.

Expectativas de Género y Roles de Cuidado

Las expectativas de género influyen en la asignación de roles de cuidado, siendo las niñas socializadas para asumir responsabilidades tanto en el hogar como fuera de este. Esto puede exponerlas a una carga adicional de responsabilidad, limitando su acceso a la educación y oportunidades de desarrollo personal. Además, las niñas y niños mayores pueden asumir roles de cuidadores para otros menores, renunciando a su propia infancia o adolescencia.

La no escolarización aumenta la vulnerabilidad a situaciones como el trabajo infantil forzado, reclutamiento forzado y abuso sexual. Aunque aproximadamente el 96% de niñas y niños en Istmina asisten a la escuela, la respuesta a estos desafíos implica la creación de entornos protectores más sólidos y acciones complementarias.

Desafíos en Quibdó

En Quibdó, las niñas y niños desplazados se asientan en barrios de bajos recursos y alto riesgo, donde las madres, padres y cuidadores, al buscar sustento económico, deben dejar a sus hijas e hijos en casa, exponiéndolos al reclutamiento por parte de grupos criminales. En este contexto, algunas niñas y niños asumen roles de cuidadores para otros menores, añadiendo otra capa de vulneración.

Educación y Prevención

Aunque en Quibdó existen organizaciones y fundaciones dedicadas a abordar estas problemáticas y ofrecer alternativas positivas para el tiempo libre de las niñas y niños, la magnitud de la niñez en las escuelas supera la capacidad de estas iniciativas. Es fundamental fortalecer la

vigilancia activa y las medidas preventivas en el ámbito educativo para proteger a la niñez de posibles riesgos y garantizar un entorno propicio para su desarrollo integral.

Consumo de Sustancias Psicoactivas

El creciente consumo de sustancias psicoactivas entre adolescentes es una preocupación latente en Quibdó. Jóvenes expresan el deseo de dejar el consumo, pero temen represalias por parte de los proveedores de drogas si intentan hacerlo, lo que pone en riesgo su integridad.

“Los jóvenes están pidiendo una oportunidad, que les den aquí para ver cómo limpian su estómago, cómo limpian su cerebro, tienen miedo de venir a centro y pedirles apoyo a las autoridades porque saben que si vienen pueden ser que están dando información del grupo del sector y eso les permite que los pueden matar.” (Líder social, 2024)

Violencia intrafamiliar y explotación sexual y comercial

La violencia intrafamiliar y la explotación sexual y comercial afectan tanto hogares como instituciones educativas en Quibdó. Actores armados influyen causando daños psicológicos a través de amenazas, violencia y humillación pública. Las niñas, en particular, son víctimas de diversas formas de violencia basada en género, incluyendo daños físicos y explotación sexual y comercial, afectando su integridad física y mental y exponiéndolas a embarazos infantiles forzados.

El deterioro socioeconómico, la ruptura familiar, condiciones de saneamiento precarias, falta de afiliación a seguridad social y escaso acceso a servicios de salud contribuyen a esta problemática. Los datos presentados previamente sobre abusos sexuales, embarazos infantiles forzados y violencia de género ilustran la magnitud de la vulneración de derechos en la región.

Embarazo infantil forzado

La problemática de los embarazos infantiles forzados afecta a niñas menores de 14 años. En Istmina, se registraron aproximadamente 7 casos en 2022, mientras que en Quibdó se reportaron alrededor de 31 casos. Estos

embarazos suelen derivarse de relaciones de poder, principalmente entre personas mayores y niñas, a menudo presentadas como "consensuadas".

Desafíos en el Reporte y Prevención

La reticencia a denunciar estas situaciones persiste debido al temor a represalias por parte de grupos armados, exacerbando la vulneración de derechos. En algunas comunidades, la vinculación afectiva de niñas con miembros de bandas criminales, inicialmente vista como estabilidad, puede transformarse en situaciones de riesgo al cambiar el control del territorio. La violencia física y el uso de niñas y niños como "campaneros" para transmitir mensajes añaden capas de preocupación.

En las comunidades indígenas, las niñas enfrentan interrupciones educativas tras la menarquia o embarazo infantil forzado, interpretado como razón para abandonar la educación, evidenciando la complejidad de los desafíos en el territorio. La respuesta a estas problemáticas requiere un enfoque integral y acciones coordinadas para proteger a la niñez y adolescencia en Quibdó.

“Hay niñas que se vinculan sentimentalmente, se embarazan de esos pelados y luego tienen que salir de los barrios porque otra banda tomó el control del barrio, la pelada que está embarazada o tiene el hijo del que es del otro tiene que irse del barrio, irse de la ciudad y eso pasa muy a menudo en la ruralidad.” (Líder social, 2024)

Minería ilegal

La minería ilegal se ha convertido en un componente crítico de la compleja situación en el departamento del Chocó, especialmente en el Litoral Pacífico. La presencia de grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha marcado una disputa intensa, centrada en los intereses económicos relacionados con los cultivos de hoja de coca y la minería ilegal.

Disputa de Territorios

La contienda se concentra en municipios clave como Alto y Bajo Baudó, así como en el municipio del Litoral del San Juan. Las AGC y el ELN buscan controlar los corredores de movilidad del narcotráfico con acceso al océano Pacífico y a Centroamérica. Esta lucha por el control territorial ha exacerbado la situación humanitaria, generando emergencias humanitarias con acciones armadas y ataques contra la población civil.

Involucramiento de Adolescentes en Minería Ilegal

En medio de esta crisis, líderes locales informan que adolescentes de Quibdó e Istmina han optado por involucrarse en la minería ilegal. Los "chongos", actores armados dedicados a esta actividad, llegan a los territorios y persuaden a jóvenes para que trabajen en estas operaciones ilícitas. Este involucramiento puede deberse a factores como la falta de oportunidades económicas, la coacción por parte de estos grupos armados, y la búsqueda de medios de subsistencia en entornos económicamente precarios.

Esta situación expone a los adolescentes a riesgos significativos, no solo en términos de seguridad personal, sino también en su desarrollo integral. El trabajo en la minería ilegal puede tener impactos negativos en la salud física y mental de los jóvenes, así como en su acceso a la educación y oportunidades de crecimiento personal.

Desplazamiento y Amenazas Constantes

El deterioro de la situación humanitaria, ligado a la disputa territorial y la presencia de grupos armados, también ha llevado a un aumento en el desplazamiento de comunidades locales. Las amenazas constantes y la violencia asociada con la minería ilegal crean un entorno donde las familias se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad.

En este complejo escenario, la minería ilegal se presenta como un factor adicional que contribuye a la vulnerabilidad de las comunidades en el Chocó. La necesidad de intervenciones humanitarias y esfuerzos coordinados para abordar las causas subyacentes de estas problemáticas es

crucial para mitigar el impacto negativo en la población, especialmente en la niñez y adolescencia afectada.

“Entonces en ocasiones no podemos estar hablando, pero eso nos ha hecho daño a nosotros también porque las afectaciones que nos hacen al territorio nuestra adolescencia se han ido a la minería han metido muchos y muchos jóvenes ya están allá metidos en la minería y no salen porque es la única fuente de ingresos que tienen las comunidades para subsistir y hacer resistencia y eso es preocupante.” (Líder social, 2024)

Salud mental y bienestar psicosocial

La carga en la salud mental de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Istmina, impuesta por el contexto del conflicto armado, se manifiesta a través de la exposición rutinaria a situaciones de violencia. La constante presencia de armas, sonidos ensordecedores y la visión frecuente de helicópteros generan malestares psicológicos. El miedo se convierte en un efecto palpable, arraigándose como una respuesta natural ante estas amenazas.

La normalización de la presencia de armas en la vida cotidiana contribuye a la naturalización de la violencia para algunas niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esta normalización tiene implicaciones significativas en su percepción de la seguridad y en la manera en que internalizan la violencia en su entorno.

A pesar de la gravedad de la situación, los datos sobre problemas asociados a la depresión y la ansiedad son escasos debido a la falta de personal capacitado y al tabú que rodea estos temas en la población. En Istmina, se registró un suicidio asociado a problemas de salud mental, mientras que en Quibdó se reportaron 8 casos, incluyendo a una persona menor de edad, evidenciando el riesgo en el territorio asociado a la salud mental.

Acompañamiento Psicosocial y Limitaciones

Frente a situaciones que demandan acompañamiento psicosocial en las escuelas, la mayoría de los casos se derivan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

(ICBF) debido a la limitación de recursos humanos en las instituciones educativas. La falta de personal capacitado ha generado una dependencia significativa del ICBF, convirtiéndose en un recurso crucial para brindar la atención necesaria a las niñas, niños y adolescentes que enfrentan desafíos emocionales y psicológicos en el entorno escolar.

Explotación y Trabajo infantil forzado

El trabajo infantil forzado en la región es una consecuencia de complejas situaciones económicas, culturales, políticas y sociales que afectan el núcleo familiar y la integridad personal de las niñas y niños. La falta de evolución en términos de calidad y cobertura del sistema educativo, junto con deficiencias en los programas de alimentación escolar, contribuyen a la necesidad de que las niñas y niños trabajen desde temprana edad para satisfacer las necesidades económicas del hogar.

Líderes y lideresas comunitarios destacan que algunas niñas y niños realizan labores en las calles, como la venta de dulces en semáforos o mercados, debido a la falta de alternativas para el cuidado en el hogar. A pesar de estas actividades, las niñas y niños están matriculados en instituciones educativas, asistiendo a clases en horarios opuestos a sus labores, evidenciando la lucha por equilibrar el trabajo y la educación en circunstancias desafiantes.

Desastres naturales, cambio climático y Epidemias

Las entrevistas realizadas en la comunidad del casco urbano de la ciudad de Quibdó han evidenciado la frecuencia de desastres naturales en la región, tales como inundaciones, vientos fuertes y deslizamientos en los últimos años. La ausencia de planes estratégicos para la gestión de riesgos ha resultado en la pérdida de vidas y bienes materiales, contribuyendo al empobrecimiento generalizado en la región.

La falta de revisiones periódicas de los planes de riesgo y la identificación oportuna de las áreas más afectadas ha llevado al deterioro de los centros educativos. Las aulas

han sufrido daños y las inundaciones recurrentes han obligado al cierre de estos centros, aumentando el riesgo para las personas menores de edad frente a estos fenómenos naturales.

En cuanto a las epidemias, la principal alarma se debe a los vectores transmisores del dengue, malaria y zika. Estas enfermedades, con diversas presentaciones clínicas y evolución impredecible, son transmitidas por mosquitos, especialmente el *Aedes aegypti*. La vulnerabilidad de niñas y niños se agrava debido a su ubicación en zonas de alto riesgo, afectando a más de 2000 de ellos por desastres naturales. A pesar de esto, las inundaciones son percibidas como algo común por parte de la población infantil.

En Quibdó, las instituciones educativas, especialmente las ubicadas a orillas del río Atrato en áreas rurales, son afectadas principalmente por inundaciones, deslizamientos y vendavales. Estos desastres no solo comprometen la infraestructura escolar, sino que también generan consecuencias adicionales, como confinamientos y desplazamientos que agudizan las necesidades humanitarias.

Las escuelas se han convertido en activos comunitarios esenciales en la gestión de emergencias, ya que la mayoría de los corregimientos carecen de espacios como casas comunales. A pesar de la construcción de nuevas instituciones educativas a mayor altura para mitigar el impacto de las inundaciones, la gestión de riesgos enfrenta desafíos significativos. La falta de una cartografía de riesgos y la limitada capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo destacan la necesidad de una mayor conciencia y preparación en toda la comunidad educativa.

Aunque se realizan simulacros anuales y se elaboran planes de emergencia, la capacidad de respuesta se ve limitada. La información sobre riesgos no se transmite de manera efectiva a los estudiantes, subrayando la necesidad de un enfoque más constante y compartido en la comunidad educativa. La falta de recursos también se refleja en la ausencia de un sistema de alerta rápida y temprana en las instituciones educativas.

Falta de acceso a servicios básicos (incluido WASH) y medios de subsistencia

La falta generalizada de acceso a servicios públicos es una preocupación crítica en el territorio, con escasa disponibilidad de agua potable y servicios básicos en la mayoría de los hogares. Aunque algunas escuelas tienen acceso al agua potable, surgen problemas debido al deterioro de las instalaciones sanitarias, la degradación de la infraestructura y la limitada cantidad de baños, lo que genera problemas significativos de salud pública.

En Quibdó, según datos estimados hasta el año 2022, la cobertura de acueducto alcanza el 45.54%. En áreas urbanas, este porcentaje es del 43.87%, mientras que en áreas rurales llega al 98.96%. Respecto al alcantarillado, la cobertura total es del 20.38%, siendo del 17.92% en áreas urbanas y del 98.96% en áreas rurales. Sin datos actuales sobre Istmina, se presume que la cobertura de agua potable es aún menor.

La población en Quibdó depende en gran medida del agua de lluvia como fuente principal de consumo, una práctica que se torna más crítica para las poblaciones indígenas ubicadas a orillas de los ríos. En estas comunidades, las actividades diarias, incluida la higiene, se realizan cerca de los ríos, que también sirven como fuente principal de agua.

En el ámbito escolar, la falta de saneamiento es un problema complejo. Las instalaciones sanitarias, como las baterías de baños, a menudo presentan mal funcionamiento u obstrucciones. Esta situación conduce a que las niñas y niños asistan a clases solo durante unas pocas horas al día, afectando negativamente su rendimiento académico.

Mientras que las instituciones educativas en el centro de Quibdó tienen acceso a agua potable, las ubicadas en la periferia y zonas rurales carecen de este servicio. Ante la escasez, la Unidad de Gestión de Riesgos suministra agua mediante carros tanque, aunque esta provisión resulta limitada, especialmente durante la temporada de sequía.

En este contexto de falta de acceso a agua potable y saneamiento adecuado, las mujeres y niñas enfrentan desafíos específicos relacionados con la higiene menstrual

y la recolección de agua. La falta de instalaciones adecuadas en escuelas y comunidades puede llevar a la estigmatización y al ausentismo escolar entre las niñas durante su periodo menstrual. La limitación en el acceso a agua limpia también puede exponerlas a riesgos de seguridad y salud adicionales durante la recolección de agua en largas distancias.

Contexto Educativo y Calidad del Servicio

La educación enfrenta desafíos significativos, como se refleja en las estadísticas educativas de Istmina, que registran tasas de deserción del 3.98%, cobertura neta del 111.58%, cobertura bruta del 131.51%, e índices de repitencia del 11.34%. Aunque Quibdó presenta una mejora relativa con una tasa de deserción del 1.76%, la cobertura neta es del 102.06%, la cobertura bruta del 115.29%, y un índice de repitencia del 7.68%, aún se evidencia la necesidad de intervenciones para mejorar múltiples indicadores educativos.

La capacitación insuficiente de los docentes en áreas cruciales como salud mental, bienestar socioemocional y atención a la violencia de género se atribuye a la escasez de recursos. La falta de consulta a las instituciones educativas locales en la toma de decisiones sobre materiales educativos y planes de compra también contribuye a la ineficiencia y desconexión entre las necesidades reales y las soluciones implementadas.

La falta de capacitación para docentes que atienden a estudiantes con discapacidad es una brecha significativa. La rotación del personal docente capacitado agrava aún más el problema. La infraestructura escolar carece de ajustes razonables para garantizar la accesibilidad para niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad, lo que obstaculiza su participación y aprendizaje efectivo.

Desplazamiento y Problemas Adicionales

El desplazamiento interurbano en Quibdó afecta a estudiantes con discapacidad al obligarles a adaptarse a nuevos entornos sin garantías de acceso y apoyo. La falta de información sobre opciones educativas y laborales después de la graduación contribuye a altas tasas de deserción entre estudiantes con discapacidad.

La estrategia de "*Escuela de Padres*" aborda temas cruciales, pero su eficacia podría mejorarse mediante la participación más activa del cuerpo docente y los padres. La inestabilidad en la conexión a internet impacta negativamente las clases en línea, afectando la calidad del aprendizaje y limitando el acceso a recursos en línea.

Alimentación Escolar

A pesar de beneficiar a 32,000 estudiantes, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) enfrenta desafíos logísticos y posibles actos de corrupción que afectan la distribución adecuada de alimentos. Las demoras en la implementación

en áreas rurales y las preocupaciones sobre la cantidad insuficiente de suministros resaltan la necesidad de revisar y mejorar los procesos logísticos.

Las denuncias sobre posibles actos de corrupción en el PAE son preocupantes y subrayan la importancia de medidas efectivas de supervisión y rendición de cuentas. Además, la dependencia exclusiva de algunos niños de los recursos proporcionados por las instituciones educativas destaca la urgencia de abordar la insuficiencia de alimentación adecuada para garantizar el bienestar integral de los estudiantes.

CAPACIDAD DE RESPUESTA Y RETOS DE ATENCIÓN

Tabla 1. Capacidad de Respuesta para brindar atención ante el escalamiento del conflicto y la agudización de los problemas estructurales en Quibdó e Istmina.

● Atención o servicios disponibles
 ● Atención o servicios disponibles, pero con funcionalidad reducida
 ● Baja oferta de atención o servicios limitados
 ● Atención o servicios no disponibles

Tipo de oferta	Violencias Basadas en Género	Reclutamiento	Desplazamiento	Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin Explotar (MUSE)	Salud mental	Salud sexual y reproductiva (SSR)	Embarazo infantil forzado	Educación	Seguridad alimentaria y nutrición	Agua, saneamiento e higiene (WASH)
Oferta institucional (nivel municipal)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oferta institucional (nivel departamental / nacional)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oferta de cooperación	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oferta comunitaria	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Oferta de cooperación

El Equipo Local de Coordinación de Chocó (ELC) desempeña un papel crucial en la gestión humanitaria y el desarrollo, liderado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Con 28 organizaciones participantes, incluidas agencias de la ONU, ONG internacionales y nacionales, y observadores, el ELC aborda tanto respuestas inmediatas a emergencias humanitarias como esfuerzos continuos de desarrollo y paz.

Enfoques y Participantes: La oferta se centra principalmente en la protección, con organizaciones como ONU Mujeres, MAPP/OEA, PNUD, FAO, ACNUR, USAID, OIM, WORLD VISION y PASTORAL SOCIAL, entre otros. En educación, destacan el Consejo Noruego para Refugiados, WORLD VISION, el Comité de Derechos del Niño (CRC) y UNICEF. El ELC actúa como coordinador de acciones multisectoriales en los 30 municipios de Chocó, abordando emergencias humanitarias y fortalecimiento comunitario desde perspectivas de desarrollo y paz.

Coordinación y Participación Local: El ELC Chocó promueve la interlocución con autoridades territoriales, como Consejos Comunitarios y Organizaciones Indígenas, y colabora con entidades como UARIV, UNGRD, la Defensoría del Pueblo Regional Chocó y el Ministerio de Salud y Protección Social. La cooperación se extiende a las Alcaldías de los 30 municipios, generando espacios de análisis e incidencia.

Iniciativas Destacadas en Quibdó: En Quibdó, diversas organizaciones desempeñan roles esenciales. La Fundación Pies Descalzos, a través del programa Todos Al Cole, enfatiza la permanencia de niños mediante kits escolares y centros socioemocionales. El Programa Nacional de Educación para la Paz, financiado por 7 organizaciones, incide en instituciones educativas urbanas y rurales. Aldeas Infantiles se centra en la protección familiar, mientras que UNFPA y UNICEF abordan temáticas de género, derechos humanos y salud.

Grupos Temáticos: Los principales espacios de discusión se centran en el Grupo Temático de Protección (GTP), Grupo de Género, Grupo de Salud, Grupo de Agua y Saneamiento Básico, Mesa de Educación en Emergencia, Grupo de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Grupo Temático de Desarrollo y Paz (GTDP). Estos grupos permiten la coordinación efectiva y la implementación integral de iniciativas para mejorar las condiciones de vida y educación en Quibdó.

Retos y brechas en la atención

1. Salud Mental y Apoyo Psicosocial:

- Escasez de recursos humanos capacitados para abordar la carga de problemas de salud mental, especialmente en áreas afectadas por el conflicto armado.
- Tabú y falta de datos claros sobre problemas asociados a la depresión y la ansiedad, lo que dificulta la implementación de intervenciones adecuadas.

2. Trabajo Infantil Forzado:

- Condiciones económicas, culturales y educativas que propician el trabajo infantil forzado, afectando el desarrollo y bienestar de niños y niñas.
- Limitaciones en el acceso a una educación de calidad y a programas de alimentación escolar adecuados, contribuyendo al ciclo de pobreza y explotación.

3. Desastres Naturales y Epidemias:

- Falta de planes estratégicos para la gestión de riesgos, lo que lleva a pérdidas humanas, materiales y cierre de instituciones educativas durante desastres naturales.
- Amenazas persistentes de epidemias, especialmente transmitidas por vectores, que afectan a la población, con especial vulnerabilidad en niños y niñas.

4. Falta de Acceso a Servicios Básicos (WASH) y Medios de Subsistencia:

- Deficiencias en servicios públicos básicos, incluyendo acceso limitado a agua potable y saneamiento, generando problemas de salud pública y limitando la asistencia escolar.
- Desafíos específicos para mujeres y niñas relacionados con la higiene menstrual y recolección de agua, aumentando el riesgo de infecciones y afectando su participación activa en la sociedad.

5. Contexto Educativo y Calidad del Servicio:

- Tasa de deserción escolar y baja cobertura neta, indicando desafíos en el acceso y permanencia de niños y niñas en el sistema educativo.
- Escasez de capacitación para docentes en áreas críticas como salud mental y atención a personas con discapacidad, lo que afecta la calidad educativa y la inclusión.
- Problemas en la infraestructura escolar, conexión a internet inestable y carencia de ajustes razonables para estudiantes con discapacidad, afectando el acceso equitativo a la educación.

RECOMENDACIONES PARA LA

Desde las mismas comunidades, las personas participantes de los ejercicios de captura de datos en el marco de la evaluación detallada de necesidades destacaron algunas recomendaciones claves para mejorar la respuesta en términos del conflicto armado, las afectaciones por desastres de origen natural y calidad educativa.

Conflicto armado	Desastres de origen natural	Calidad educativa	VBG
<p>*Trabajar en estrecha colaboración con organizaciones locales, nacionales e internacionales, así como con la comunidad, para garantizar una respuesta coordinada y sostenible a los desafíos presentes en la región.</p> <p>*Programas de capacitación en primeros auxilios comunitarios (incluido los primeros auxilios emocionales).</p> <p>*Mayor ejecución de proyectos sociales en articulación entre cooperación internacional, instancias garantes a nivel municipal y las comunidades.</p> <p>*Desarrollar programas educativos y vocacionales que brinden alternativas atractivas para las y los jóvenes, reduciendo la exposición al reclutamiento forzado.</p>	<p>* Mejora en el fortalecimiento Institucional para la acción y el trabajo en contextos de violencia, especialmente en educación en emergencia. Actualizar la normatividad, y que esta sea comunicada a docentes, especialmente quienes están ubicados en zonas de conflicto.</p> <p>*Actualizar plan de gestión de riesgos con las escuelas y comunicar adecuadamente a todo el plantel educativo</p> <p>*Adecuación de puestos de salud y dotación para la atención en emergencias (planes de mitigación, sistemas de radio, kits de rescate y lanchas rápidas).</p> <p>*Mayor articulación interinstitucional y comunitaria a través de Comités Comunitarios y Mesas Rurales de Gestión del Riesgo</p> <p>*Procesos de educación en emergencias con las comunidades ribereñas.</p> <p>*Centros de protección y albergue con la dotación necesaria para la atención en emergencias.</p>	<p>*Implementar programas de formación y capacitación para el cuerpo docente, centrándose en estrategias pedagógicas efectivas, gestión del aula y atención a estudiantes en contextos de vulnerabilidad, incluidos niñas y niños con discapacidad.</p> <p>* Dotar a las escuelas con recursos educativos adecuados, incluyendo libros de texto, material didáctico y acceso a tecnología.</p> <p>* Desarrollar iniciativas específicas para prevenir y abordar el trabajo infantil, brindando alternativas y concientizando a las comunidades sobre la importancia de la educación.</p> <p>* Priorizar la inversión en infraestructura, incluyendo la construcción y renovación de aulas de clases, espacios comunes y áreas recreativas.</p>	<p>*Establecer programas de apoyo psicosocial para las víctimas del conflicto, incluyendo a quienes han experimentado desplazamiento forzado, violencia sexual y reclutamiento forzado. Con un enfoque integral que incorpore las perspectivas de género y diferencial *Capacitar a profesionales de la salud, educación y servicios sociales para identificar, apoyar y derivar adecuadamente a las víctimas de VBG, con un enfoque especial en las necesidades de la niñez migrante y desplazada.</p> <p>*Fortalecer programas de salud sexual y derechos sexuales y reproductivos</p> <p>* Garantizar que las escuelas cuenten con baterías sanitarias de manera inclusiva adecuadas para el acceso al agua potable y la higiene, teniendo en cuenta las necesidades de privacidad, comodidad y seguridad de las niñas durante su período menstrual.</p>

METODOLOGÍA

Este reporte presenta los hallazgos de la evaluación detallada de necesidades realizada en los municipios de Quibdó e Istmina.

La evaluación detallada de necesidades se basó en la revisión de fuentes primarias y secundarias. La consulta a fuentes primarias contempló ejercicios de recolección de información cualitativa a través de entrevistas individuales virtuales a líderes y lideresas sociales, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios/as de instituciones gubernamentales del departamento (6 entrevistas) y 2 grupos focales realizados el 11 y 12 de enero. El grupo focal del 11 de enero contó con la participación de 12 funcionarios/as de la Secretaría de Educación Municipal de Quibdó y 1 persona de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El grupo focal del 12 de enero contó con la participación de 5 personas, de los cuales 4 pertenecientes a instituciones gubernamentales y 1 persona líder social. Resultó desafiante asegurar la participación de actores institucionales estatales en la recopilación de información, dada la situación política y administrativa durante el proceso de transición entre gobiernos locales y regionales.

Para el análisis de fuentes secundarias se realizó la revisión del Observatorio Contando lo Invisible de Fundación PLAN, Fuentes Oficiales (DANE, RNI, SPOA, entre otros), diagnósticos y evaluaciones de necesidades previas adelantadas por Fundación PLAN, repositorio de evaluaciones del GIFMM, la oferta del Equipo Local de Coordinación y las Alertas por Situación Humanitaria de OCHA, prensa y demás fuentes que han documentado las dinámicas sociales en Quibdó, Istmina y el departamento del Chocó.

REFERENCIAS

- Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), Una guerra sin edad. Informe nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano, CNMH, Bogotá
- Observatorio Contando lo Invisible, Fundación PLAN a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV, DANE 2018.
- Observatorio Contando lo Invisible, Fundación PLAN a partir de datos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres – UNGDRD
- Observatorio Contando lo Invisible, Fundación PLAN a partir de datos de EEVV, DANE y CNPV.
- Observatorio Contando Lo Invisible, Fundación PLAN, a partir de datos del SPOA, Fiscalía general de la nación. Actualización al 04 de septiembre de 2023.
- Observatorio Contando Lo Invisible, Fundación PLAN, a partir de datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), 2020 a 2022* (* cifras preliminares).
- Observatorio Contando lo Invisible, Fundación PLAN a partir de datos de la Red Nacional de Información (RNI), 2023.
- Observatorio Contando lo Invisible Fundación PLAN, a partir de datos de Acción contra Minas (AICMA), Presidencia de la República. Fecha de corte: 31 de julio de 2023.
- OCHA – Equipo Local de Coordinación de Chocó (27 de septiembre de 2023). Colombia: Briefing Departamental, Chocó, enero a junio 2023.
- OCHA – (2023) Equipo Local de Coordinación de Chocó
- Procuraduría General de la Nación (14 de julio de 2023). Reclutamiento forzado, deserción escolar y desabastecimiento. Secuelas de la guerra entre grupos ilegales en Chocó.
- Procuraduría General de la Nación (23 de diciembre de 2023). Procuraduría pide revocar licitación del PAE en Quibdó